



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, diecinueve de agosto de dos mil veintidós**

#### **19-112**

Proceso: ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN  
Demandante: **MARIA EUGENIA CARVAJAL VELASQUEZ**  
Demandado: **COLPENSIONES y PORVENIR S.A.**  
Radicado No.: 05001-31-05-002-2017-00872-01.  
Tema: Ineficacia traslado y pensión vejez  
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las entidades demandadas dentro del proceso de la referencia.

Conforme al memorial allegado se reconoce personería a la doctora **ADRIANA MARIA CORREA CARRASCAL**, identificada con cédula de ciudadanía número 64.583.146 y portadora de la tarjeta profesional de abogado número 197.178 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los intereses de **COLPENSIONES** conforme sustitución que le hiciera el apoderado **FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI**, identificado con C.C. 71.379.806 y T.P Nro. 198.214 expedida por el C.S. de la J., en su calidad de representante legal para procesos de la firma **PALACIO CONSULTORES S.A.S.**

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 24** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

##### **1.1. LO PRETENDIDO**

Solicita la demandante mediante este trámite, en síntesis, que tras la declaratoria de **NULIDAD Y/O INEFICACIA** del traslado a la administradora del RAIS, se tenga como válidamente afiliada al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad, ordenándose a Porvenir S.A. trasladar a Colpensiones todos y cada uno de los aportes que efectuó en el RAIS, incluyendo los rendimientos y sin ningún tipo de descuento por cuota de administración.

Como consecuencia de la anterior, pretende se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de vejez de manera retroactiva desde el cumplimiento de los 57 años.

### **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- ✓ Que nació el 16 de diciembre de 1959.
- ✓ Que estuvo afiliada en el ISS desde septiembre de 1982 hasta diciembre del mismo año.
- ✓ Que laboró entre el 25 de abril de 1983 y el 22 de febrero de 1987, y desde el 28 de junio de 1988 hasta el 12 de agosto de 1998, para la Seccional de Salud de Antioquia.
- ✓ Que en julio de 1998 se trasladó a Horizonte, hoy Porvenir (enlista la información suministrada y los aspectos que nunca le explicó el asesor).
- ✓ Que al 31 de septiembre de 2017 contaba con un total de 1527 semanas cotizadas, correspondientes a la sumatoria de 775.48 en el RAIS, 17.43 en el ISS y 734.34 al servicio de la Seccional de Salud de Antioquia.
- ✓ Que de haber permanecido en el régimen de prima media, a los 57 años habría percibido una mesada superior a la ofrecida en el RAIS (\$2.231.981 versus \$689.455).
- ✓ Que solicitó ante las demandadas la declaratoria de ineficacia y/o nulidad de traslado con el fin de retornar al RPM, obteniendo respuesta negativa.

### **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Controvirtieron las entidades demandadas el derecho pretendido.

Inicialmente se pronunció COLPENSIONES aceptando como cierta la fecha de nacimiento de la actora, el tiempo que estuvo vinculada al RPM y lo atinente a los trámites administrativos adelantado en esa entidad. Por su parte PORVENIR S.A., en síntesis, negó el incumplimiento del deber de información y buen consejo argumentando con que no podía tildarse de falsa o engañosa la manifestación de un asesor del RAIS, por cuanto un afiliado sí lograr obtener una

pensión más alta en contraste con la que recibiría en el RPM y a la edad que escoja, ya que, dada la esencia del RAIS, era perfectamente posible poner en manos del afiliado la decisión respecto a su futuro pensional a través de la planeación y el ahorro. Igualmente refiere que brindó una información oportuna, clara, suficiente, concreta, adecuada y veraz respecto de los aspectos que ampliamente reseña.

#### **1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia proferida el 29 de abril de 2019, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín declaró no sólo la ineficacia de la afiliación al RAIS, sino además que la demandante había permanecido en el régimen de prima media sin solución de continuidad. Condenó a Porvenir S.A. a trasladar a Colpensiones todos los valores que hubiese recibido con motivo de la afiliación como cotizaciones completas, bonos pensionales con todos sus frutos e intereses, es decir, con los rendimientos causados, con excepción de los dineros por *concepto de administración de la cuenta*.

Igualmente condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la PENSIÓN DE VEJEZ una vez se acredite el retiro del sistema, y con apego a lo normado en la Ley 797 de 2003, teniendo en cuenta 13 mesadas por año.

Finalmente condenó en costas a PORVENIR S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$3.000.000.

Dentro del término concedido por la ley, las entidades accionadas interpusieron y sustentaron RECURSO DE APELACIÓN.

### **2. ARGUMENTOS**

#### **2.1. DEL JUEZ PARA CONDENAR**

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de la administradora del RAIS, en quién recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral, excepto en lo relacionado con los montos a retornar.

Respecto a la pensión de vejez, de acuerdo a las exigencias previstas en la Ley 797 de 2003, encontró plausible ordenar su reconocimiento, por cuanto la demandante había cumplido 57 años para una data en la que contaba con más de las 1.300 semanas. Empero, el disfrute lo ató a la desafiliación del sistema, dado que aún se encontraba cotizando al régimen pensional.

## **2.2. RECURSO DE APELACIÓN**

### **2.2.1. APELACIÓN COLPENSIONES.**

Considera que la demandante NO debía retornar a dicha entidad sino a Pensiones Antioquia. De un lado, por cuanto la afiliada estaba inmersa en la prohibición legal contemplada en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, ya que le faltaban menos de 10 años para cumplir la edad pensional, nació en diciembre de 1959 y tenía 59 años, tampoco reunía los requisitos de la sentencia SU-062 de 2010, y de otro lado, porque la afiliación que precedía, es decir, la inmediatamente anterior al traslado al RAIS, lo fue a Pensiones Antioquia, fondo que debía recibirla en virtud de la ineficacia declarada, pues a través de esta figura se retrotraían las cosas al estado anterior. Recuerda que la accionante sólo cotizó 17.43 semanas en el ISS para el año 1988, luego se vinculó con el Departamento de Antioquia donde completó un tiempo de servicio de 579 semanas y posteriormente se trasladó a COLPATRIA hoy PORVENIR, de ahí que era Pensiones de Antioquia, fondo que en la actualidad subsistía, el llamado a recibir la actora y eventualmente pensionarla.

Adujo que tampoco se acreditó un vicio del consentimiento de acuerdo a los presupuestos regulados en el art. 1508 del Código Civil, máxime si Colpensiones tampoco tuvo que ver en el traslado al RAIS de la actora, acto realizado de manera libre y voluntaria.

En cuanto a la pensión de vejez solicitó que se declare como probada la inexistencia de la obligación y en su lugar se le absuelva de tal pretensión. Expone que es PORVENIR quien debía reconocer y pagar tal prestación, ya que la accionante en la actualidad no se encontraba en la base de datos de COLPENSIONES y tampoco efectuaba cotizaciones en el RPM.

### **2.2.2. APELACIÓN PORVENIR**

Se opone a la ineficacia declarada. Afirma que de acuerdo a la prueba que militaba en el plenario, como lo era el formulario de afiliación, a la accionante se le brindó información necesaria para tomar la determinación de traslado al fondo privado, y en todo caso no se

comprobó de manera fehaciente que hubiese sido un asesor del fondo privado quien la hiciese incurrir en el supuesto error ahora aducido, toda vez que de acuerdo a lo señalado en el interrogatorio absuelto por la demandante, fue el empleador quien la obligó afiliarse a ese fondo; añade que COLPATRIA cumplió con el deber de información en los términos previstos en las normas que regían en dicha época y en todo caso, de conformidad con el Decreto 663 de 1993, el Decreto 720 de 1994 y las Circulares 031 y 034 de la Superintendencia Financiera, la consecuencia legal de un supuesto error por parte de un promotor de las administradoras, no era la declaratoria de ineficacia, sino que la indemnización del perjuicio causado, que en su criterio y para el caso objeto de estudio, brillaba por su ausencia, máxime si de acuerdo a los estudios realizados la afiliada no tenía derecho a una pensión de vejez en el RAIS.

Que de la prueba testimonial se extraía que la demandante tenía conocimiento del régimen de transición, bono pensional, entre otros temas, producto de las reuniones individuales y grupales a las que asistieron, generándose además la duda acerca de la veracidad de la afirmación relacionada con la injerencia del empleador, pues la actora se trasladó, pero su compañera no, de ahí que realmente la decisión de afiliación era libre y voluntaria. Que además la señora María Eugenia confesó que su motivación para retornar no era la ausencia de información sino el monto de la pensión.

En cuanto a las costas procesales, se opuso a las impuestas al señalar que PORVENIR siempre había actuado de buena fe y que en acatamiento de la Ley 797 de 2003, según la cual la demandante estaba inmersa en prohibición de traslado, por lo que no era caprichosa su posición como administradora. Añade que se le está dando un injusto premio a quien no actuó de manera diligente y cuidadosa.

### **2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN PRESENTADOS POR COLPENSIONES**

Destacó que la ineficacia invocada recae sobre un presunto error al que la demandante fue inducida en razón del desconocimiento, error que como vicio del consentimiento debía ser probado, sin que le fuera dable a la parte limitarse a referenciar su existencia. En tal sentido considera que el engaño invocado por la accionante no fue acreditado con la prueba documental o la testimonial, por lo que la ineficacia alegada carecía de viabilidad, agregando que lo que narrado frente a lo acontecido hacía tantos años no podía ser tomado como una verdad absoluta, de ahí que se continuara desconociendo lo que realmente aconteció, esas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio aquel traslado en julio de 1996, cuando se encontraba

vigente el Decreto Ley 663 de 1993, que solo exigía a las AFP diligenciar el formulario con el lleno de requisitos.

Solicitó que, de confirmarse la declaratoria de ineficacia, se tuviera en cuenta la SL 1688 de 2019 de la Sala de Casación Laboral en el sentido que se garantizara la devolución de todo el capital que se encontrara en la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo los rendimientos, los aportes de garantía de pensión mínima y las sumas de gastos de administración, debidamente indexados.

Por otro lado, reiteró la solicitud presentada en audiencia de primera instancia consistente en llamar en calidad de litis consorte necesario a PENSIONES DE ANTIOQUIA, toda vez que fue el último fondo que estuvo afiliada la demandante antes de trasladarse al RAIS, entidad no estaba liquidada y que al día de hoy también era administradora del Régimen de Prima Media.

### **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

De acuerdo a lo planteado en los recursos de alzada, se establecerá si es dable declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia. Dependiendo de ello se establecerá que haberes le corresponde retornar a la administradora del RAIS accionada y si es procedente exonerarla de las costas.

No obstante, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de alzada, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

Es por ello que igualmente se estudiará todo lo atinente al reconocimiento de la pensión de vejez, analizando además a cuál entidad le correspondería su eventual otorgamiento.

### **4. CONSIDERACIONES**

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado***. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que algunos fondos privados brindaban, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar*

un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna. (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información  <b>ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA LA DEMANDANTE</b>	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.°, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.° del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.° 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta a la actora afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, del recuento realizado, así como del interrogatorio absuelto por la demandante se desprende que para la época de traslado al RAIS, concretamente 30 de septiembre de 1998 cuando suscribió el formulario de vinculación a COLPATRIA hoy PORVENIR (fl. 147 del archivo 02 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información** y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía la actora respecto al funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado básicamente motivado por el relato de algunos beneficios pero sin explicarle como podía acceder a ellos y la injerencia por parte de su empleador.

Y es que expresamente la señora MARIA EUGENIA CARVAJAL VELASQUEZ en el interrogatorio absuelto indicó que es enfermera, docente de catedra universitaria. Respecto de su

traslado al RAIS recordó que en ese entonces había recién ingresado a laborar para COLPATRIA, concretamente en el área directiva de prevención de riesgos, donde constantemente tenía reuniones de naturaleza directiva en las cuales la gerente regional insistía constantemente que se debía usar los productos ofrecidos por la entidad, entre ellos medicina pre-pagada, tarjeta débito, seguro de vida. Que se sintió muy presionada, a lo que se le sumó las constantes visitas de los asesores comerciales instándola a cambiarse régimen, buscando una comisión. Que conocía la figura del bono pensional pero por sus propios medios y no por que se lo hubiesen explicado en alguna reunión, pues en las charlas nunca le hablaron acerca de las características del RAIS, que sólo se le acercaban con premura en busca de su firma, la cual terminó signando ante tal presión de sus superiores y compañeros.

Destáquese que la deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó, como lo destacó el fallador, la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

De otro lado, fungieron como testigos las señoras Marta Lucia Gonzales Trujillo y Gladis Maribel Goetz. Ahora, aunque aquellas fueron empleadas de Colpatria para la época en que ocurrió el traslado de la demandante, reconocieron que NO estuvieron presentes en el momento de la vinculación de la actora con la AFP privada accionada, de ahí que poco ilustrativas resulten. En todo caso, sí señalaron que era muy común que a los empleados de esa entidad los obligaran a tomar los paquetes o servicios ofrecidos, como lo eran las tarjetas de crédito, cuentas de ahorros, fondos de pensiones y cuanto producto ofrecieran, bajo el matiz de la fidelidad que debían tener como trabajadores, lo cual describieron que era una constante presión.

En todo caso, en gracia de discusión, aunque lo indicado por la demandante pudiese dejar entrever cierta información suministrada al momento suscribir el formulario de vinculación al RAIS, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, especialmente de cara a una persona que no tenía una formación profesional y que a voces de aquella, siempre laboró devengando un salario mínimo.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por la accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Visto, así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión que en este punto es apelada.

Bajo este contexto, de acuerdo a los razonamientos que preceden, NO es dable acoger la postura de Colpensiones en el recurso de alzada, pues aunque ciertamente la demandante sobrepasa en demasía los 47 años para efectos de solicitar su retorno a prima media, lo que aquí se examina es un asunto totalmente disímil, en donde ante la no acreditación del cumplimiento del deber de información, se declara ineficaz el traslado, y como nunca existió se acude a una especie de ficción legal entendiéndose que la persona permaneció en el régimen anterior sin solución de continuidad, en los términos del literal b) del art. 13 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 271 de ese mismo estatuto.

De otro lado, tampoco interesa a la Sala los parámetros advertidos por la Corte Constitucional mediante sentencia SU-062 de 2010, según la cual, al igual que en la SU-130 de 2013, sólo un cúmulo de personas tenía la posibilidad de retornar a prima media en cualquier tiempo al ser beneficiarios del régimen de transición pero en virtud de la densidad. No obstante, aunque ello es cierto, nada tiene que ver ese razonamiento con el tema que hoy nos convoca, donde con apoyo a lo dispuesto en el art. 271 de la Ley 100 de 1993, la asegurada busca obtener la consecuencia jurídica que allí se dispone, cuando, como en este caso, se insiste, no se acredita el cumplimiento

del deber de información para el momento en que se trasladó al RAIS, tornándose ineficaz dicho acto.

Compete ahora a la Sala abordar el asunto relacionado con el esclarecimiento de la entidad que le corresponde recibir a la demandante. Se duele Colpensiones tanto en el recurso de apelación como en los alegatos presentados ante esta instancia, de la negativa del despacho en vincular a Pensiones Antioquia. Aduce que esta era la entidad a la que estaba adscrita la demandante antes de efectuar el traslado al RAIS, es decir, la inmediatamente anterior a su vinculación a Colpatria. Y es que ciertamente, conforme se desprende del acervo probatorio, aunque inicialmente la señora Carvajal Velásquez realizó cotizaciones al otrora ISS, concretamente por algunos meses en 1982, alcanzando tan sólo 17.43 semanas cotizadas, lo cierto es que para septiembre de 1998, cuando se materializó su traslado al RAIS, se encontraba laborando para la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, contando con un tiempo válido para bono pensional de 580 semanas correspondientes al tiempo de servicio desde el año 1983 hasta agosto de 1998, momento para el cual su vinculación al sistema era con Pensiones Antioquia.

No obstante, cualquier dubitativa que el hecho pudiese generar, fue recientemente resuelta por nuestro órgano de cierre al determinar a qué entidad debía entenderse afiliada una persona cuando se declaraba la ineficacia de la afiliación al RAIS, pese a nunca haber cotizado a Colpensiones pues su permanencia en el régimen de prima media había sido a través de Pensiones Antioquia. Consúltense la sentencia STL8362-2022, Radicación 66878, oportunidad en la que la Sala de Casación Laboral, en sede de tutela, concluyó que:

“(…) Al efecto conviene memorar que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión del a quo que había ordenado el regreso de la demandante a Colpensiones para, en su lugar, absolverla por este concepto y ordenar la reactivación de la demandante en el régimen de prima media administrado por Pensiones de Antioquia, sin solución de continuidad, con el traslado de la totalidad de valores recibidos con ocasión de esa afiliación, incluyendo frutos y rendimientos causados, así como las cuotas de administración [...] y le ordenó a Pensiones de Antioquia activar la afiliación de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por esa entidad y a recibir los valores atrás descritos.

Para el efecto, señaló como hechos acreditados en el plenario que: i) Dora Cecilia Suárez Moreno nació el 29 de junio de 1964; ii) el 23 de febrero de 1987 se vinculó como trabajadora al servicio del Departamento de Antioquia – Contraloría General del Antioquia – hasta el 30 de abril del 2000, entidad en la que se hacían los descuentos para seguridad social destinados a Pensiones de Antioquia; y iii) a partir del mes de mayo de 2000 comenzó a realizar cotizaciones al RAIS, administrado por la AFP Protección SA, luego de la suscripción del formulario de afiliación el 6 de marzo de 2000.

Así, indicó que la demandante nunca estuvo afiliada al entonces ISS y mucho menos a Colpensiones, antes del traslado a Protección SA, y una vez vinculada como servidora pública al servicio del Departamento de Antioquia – Contraloría General de Antioquia en febrero de 1987, por lo que sus aportes se realizaron a Pensiones de Antioquia, al respecto indicó que:

Si bien es cierto, no es admisible que se afilien nuevos trabajadores tal y como lo refiere el apoderado de esta entidad al momento de contestar la demanda y en los alegatos de conclusión – circunstancia que regula el Dcto. 2079 de 1995 – no se trata en este caso de una nueva afiliación sino de reactivar la que ya se tenía en ese entonces al régimen de prima media al que pertenecía la señora Suárez Moreno al momento de su traslado al RAIS en mayo de 2000, razón por la cual tampoco es válido el argumento de la codemandada Pensiones de Antioquia a lo largo del trámite procesal, cuando refiere a que no es procedente que se ordene el regreso de la actora a esa entidad, por cuanto, aquella se desvinculó de la Contraloría General de Antioquia desde el mes de agosto de 2001 y no continuó siendo servidora pública. Se reitera, la consecuencia de la ineficacia de la afiliación, es que las cosas regresan a su estado anterior, como si el acto de afiliación nunca hubiere existido.

Tales apreciaciones del juzgador de instancia no las comparte ni avala esta Corporación, dada la circunstancia particular que se presenta en este caso por el hecho de haberse trasladado la demandante al RAIS, estando afiliada a un fondo previsional del sector público, Pensiones de Antioquia. Al respecto conviene recordar que el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 autorizó a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, administrar el régimen de prima media con prestación definida respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin perjuicio del derecho de selección de régimen.

De igual manera, el Decreto 2527 de 2000 en su artículo 3º dispuso que los servidores públicos que a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones se encontraban afiliados a las cajas, fondos o entidades de seguridad social de que trataba el inciso segundo del artículo 52 de la Ley 100 de 1993 y se desvincularan de la entidad pública a través de la cual estaban afiliados a dichas cajas, fondos o entidades, para continuar cotizando al sistema general de pensiones deberían afiliarse al Instituto de los Seguros Sociales o a una administradora de pensiones del régimen de ahorro individual, salvo que su vinculación a la otra entidad se produjera sin solución de continuidad, esto en los términos del artículo 60 del Decreto-Ley 1042 de 1978.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal debió tener en cuenta que para el caso de que se acreditara la ineficacia del traslado que realizó la accionante de Pensiones de Antioquia al régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS, **el regreso al statu quo implicaba que aquella debía ser redirigida al único ente que hoy administra las afiliaciones del régimen de prima media con prestación definida, esto es, el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-**, que asumió esta obligación de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto Extraordinario 4121 de 2011.

En ese escenario, a Colpensiones es a quien corresponde recibir la totalidad de los aportes realizado por la demandante a Protección, pues, se itera, los fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, conservaron la facultad legal de administrar el régimen de prima media, y la accionante cotizó a Pensiones de Antioquia, lo que implicaba considerar que la vigencia de su afiliación lo fue al régimen de prima media con prestación definida, siendo que la migración al régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS se tornó en un verdadero traslado de régimen pensional, por lo que la consecuencia de la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS, debía ser que se tenga a la demandante como perteneciente al régimen de prima media con prestación definida que actualmente es administrado por Colpensiones.

Lo anterior se acompasa por lo dicho por esta Sala, entre otras providencias, en la SL4334-2021, SL2208-2021 y SL1637-2022 (...)” (Resaltos de la Sala).

En tal sentido, acogiendo el razonamiento impuesto y como acertadamente lo indicó el juez, corresponde a Colpensiones recibir a la afiliada, siendo la destinataria del dinero que debe retornar Porvenir S.A.

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, dígase aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a la administradora del RAIS accionada, a trasladar a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se **MODIFICARÁ** la decisión adoptada por el a quo, quien tras exponer sus razones, ordenó a PORVENIR devolver los recursos de la cuenta de ahorro no así los tres ítems que componen los gastos de administración, pese a que los mismos deben ser objeto de restitución conforme el claro el precedente sentado por nuestro órgano de cierre, devolución que además debe abarcar el tiempo de permanencia de la accionante tanto en Colpatria como Horizonte, entre las cuales operó una cesión por fusión (29/09/2000), última absorbida por la administradora del RAIS aquí accionada el 1 de enero de 2014 conforme se aprecia en el reporte del SIAFP a folios 148 del plenario. De lo contrario no restituiría la totalidad del dinero.

Recordemos que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...) Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que lo procedente es el retorno de la totalidad del dinero recibido por concepto de afiliación, toda vez que no se puede ver afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente al monto total del correspondiente aporte legal.

Empero, esto no quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

De otro lado, respecto a la indexación de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente ADICIONAR el fallo toda vez que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregado a Colpensiones debidamente indexado por parte de Porvenir, teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula:  $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital}$  – capital. Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Y es que no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que la demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES, máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga), SL3207-2020 y SL1688-2019 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo)

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltense las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021<sup>1</sup>, al momento de cumplirse la orden impartida, Porvenir deberá discriminar los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados.

En cuanto a la oposición a la CONDENA EN COSTAS que en primera instancia se impuso a PORVENIR, resulta pertinente indicar que al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General de Proceso, inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, dado que sólo se examinaba si había salido avante la totalidad o no de las pretensiones, sin atender la buena o mala fe de la entidad. Sin embargo, tal posición se ha ido morigerando en casos en los que no ha sido la conducta de la entidad la que origina el conflicto que hoy se pone en conocimiento de esta Sala, máxime cuando la postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento ha dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

De ahí que cualquier negativa de Colpensiones tendiente a negar administrativamente el traslado que judicialmente solicitó la accionante, no resulte caprichoso sino que proviene de la prohibición consagrada en la Ley 797 de 2003 en torno a la imposibilidad de trasladarse entre régimen cuando un afiliado se encuentra a menos de 10 años para alcanzar la edad para pensionarse.

Tal criterio fue adoptado con ocasión de la expedición de la sentencia con radicado 44.454, debate que se dio desde la óptica de la improcedencia de los intereses moratorios en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encontraran justificadas. *Mutatis mutandis*, se ha aplicado dicho criterio PERO UNICAMENTE respecto de las costas procesales que se tasan en primera instancia a cargo de Colpensiones, no así respecto de PORVENIR, pues lo que en este aspecto se analiza no es precisamente la negativa de la respuesta a un derecho de petición, sino los efectos de una afiliación a otro régimen, es el actuar u omisión de la administradora del RAIS el que cimenta la necesidad de un afiliado de activar el aparato judicial en aras de obtener la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico, habiendo salido avante las pretensiones que en tal sentido se incoaron, razón que aunada a las que preceden impiden a esta Magistratura extender a PORVENIR el criterio de exoneración de costas, pues pervive para la misma ese deber de información, cuyo cumplimiento no acreditó.

---

<sup>1</sup> Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

## PENSION DE VEJEZ

Tras la declaratoria de ineficacia, ha de entenderse que la señora María Eugenia Carvajal Velásquez permaneció afiliada al régimen de prima media sin solución de continuidad, por lo que le es dable analizar la procedencia de la prestación por vejez de acuerdo a los parámetros que para el efecto reguló la Ley 797 de 2003, que exige el cumplimiento de 57 años en el caso de las mujeres, además de 1.300 semanas cotizadas al sistema. Veamos.

Conforme se aprecia en la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 18 del archivo 02 del expediente digital, aquella nació el 16 de diciembre de 1959, cumpliendo 57 años el mismo día y mes del año 2016, y aunque NO obra en el plenario el Registro Civil de Nacimiento, aquel dato sí es coincidente con el que aprecia en la restante documentación, incluso incorporada por Colpensiones, entre ellas la Historia Laboral, entidad que por demás, mediante Concepto 4273229 de 2013<sup>2</sup> reconoció que la cédula era un documento idóneo para acreditar la edad al momento de reclamar este tipo de prestaciones económicas.

Se encuentra pues satisfecho uno de los dos requisitos que contempla la norma.

En cuanto a la densidad tenemos que de acuerdo con las diversas Historias Laborales allegadas por las entidades, la demandante **cotizó al otrora ISS**, entre el 01 de septiembre de 1982 y el 31 de diciembre del mismo año, un total de **17.43** semanas (fl. 41 y 185 del archivo 02 del expediente digital).

Igualmente reporta un tiempo de servicio a favor del Departamento de Antioquia susceptible de ser sumado conforme lo previsto en el art. 33 de la Ley 100 de 1993, concretamente por las labores ejercidas en la **Secretaría Seccional de Salud de Antioquia** entre el 25 de abril de 1983 y 22 de febrero de 1987, y desde el 28 de junio de 1988 hasta el 12 de agosto de 1998, último lapso en el que la demandante estuvo adscrita a Pensiones Antioquia, equivalente a 4.058 días

---

<sup>2</sup> 4. Conclusiones

i) El registro civil fue estatuido por la Ley 92 de 1938 como único documento válido para acreditar el estado civil a partir de 15 de junio de 1938 y con anterioridad a ésta fecha, con la respectiva partida de bautismo.  
ii) La cédula de ciudadanía es el único documento válido, confiable e idóneo de identificación de las personas mayores de edad, de conformidad con lo regulado por la Ley 39 de 1961 y el Decreto 2241 de 1986 o Código Electoral.  
iii) En materia pensional, salvo lo estipulado en la Ley 962 de 2005 (de forma potestativa) y el Decreto 1889 de 1994 (para las pensiones de sobrevivientes únicamente), no existe ninguna otra normatividad que faculte a las entidades públicas o privadas para exigir el registro civil de nacimiento para adelantar el trámite de solicitudes pensionales.  
iv) Como quiera que con el registro civil de nacimiento se verifica, entre otros, la fecha de nacimiento y dicha data viene incluida en la cédula de ciudadanía, con el fin de reconocer las prestaciones económicas en las que se exija acreditar una edad determinada, éste documento será el idóneo para tal fin, pudiendo prescindirse válidamente del registro civil de nacimiento o de la partida de bautismo.  
v) Deberá seguirse exigiendo registro civil o partida para el reconocimiento de aquellas prestaciones en las que necesariamente deba demostrarse el parentesco, tales como (...)  
vi) La cédula de ciudadanía es un documento expedido por autoridad pública competente que se reputa auténtica conforme lo estipulado en el Artículo 25 del Decreto 019 de 2012.

que corresponden a **579,71 semanas** válidas para bono pensional, conforme el certificado emitido por la OBP y CLEBP, documentos visibles a folios 19 a 28 y 175 del archivo 02.

Ahora, a éstas deben sumársele las cotizadas al RAIS. Así pues, acudimos al último historial expedido por Porvenir S.A., concretamente con fecha de generación de informe del 29 de abril de 2019, visible a folio 189 y ss (del archivo 02), en donde se observan **845 semanas**, que sumadas a las antes referenciadas le permiten a la actora sobrepasar el umbral establecido por el legislador, **al contar con un total de 1.442 semanas cotizadas para dicha anualidad**, contexto bajo el cual es factible concluir que la prestación por vejez se habría causado cuando la afiliada cumplió la edad, concretamente en diciembre de 2016, pues para esa calenda contaba con una densidad superior a 1300 semanas.

De otro lado, respecto al **DISFRUTE** se ha considerado que éste se da cuando una vez reunidos los requisitos, un asegurado solicita a la entidad administradora el reconocimiento de la prestación y se ha dado el retiro o desafiliación tácita del sistema general de pensiones, pues para la liquidación de la prestación se debe tener en cuenta hasta el último aporte efectuado, ya que mal se haría en reconocer un retroactivo sobre unas semanas que efectivamente sirvieron de base para el cálculo de la prestación.

Bajo éste panorama, inicialmente tendríamos que la última cotización al régimen pensional sería la determinante para establecer la fecha de disfrute. Para ello, nos remitimos a la información que se extrae de la última de las Historias Laborales expedidas por Porvenir S.A., siendo tal aquella que obra a folio 189, en la cual se aprecian aportes hasta marzo de 2019 con el empleador Universidad CES, precisamente porque fue expedida en data cercana a tal fecha, concretamente el 29 de abril de la misma anualidad, de ahí que ningún otro pago podría visualizarse.

Bajo este panorama, como NO existía certeza del último aporte de la accionante al sistema, lo procedente era ordenar a Colpensiones reconocer tal prestación a partir del día siguiente a la última cotización efectuada al régimen pensional o reporte de la novedad de retiro, como acertadamente lo determinó el a quo.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** en cuanto a la declaración de ineficacia y la concesión de la pensión de vejez a cargo de Colpensiones, **modificándola y adicionándola** en los aspectos antes aludidos.

Se condenará en costas en esta instancia tanto a Porvenir como a Colpensiones por no haber tenido éxito en el recurso. Se fijarán como agencias en derecho en la suma de \$1.000.000 a cargo de cada una de las entidades y en favor de la demandante.

## 5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### DECIDE

**PRIMERO: CONFIRMA** la sentencia proferida el 29 de abril de 2019 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **MARIA EUGENIA CARVAJAL VELASQUEZ** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.052.074 contra **PORVENIR S.A. y COLPENSIONES**.


**SEGUNDO:** Se **MODIFICA** el numeral segundo del fallo, bajo el entendido que PORVENIR S.A. trasladará a COLPENSIONES **todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante desde el cambio de régimen**, incluyendo también los tres ítems que componen los gastos de administración, abarcando además el tiempo de permanencia de la actora en Horizonte y Colpatria, de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, es decir, costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, los cuales serán debidamente INDEXADOS por la administradora del RAIS al momento del pago, oportunidad en la que además discriminará los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores, últimos aspecto en el que se ADICIONA la sentencia, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO:** Costas en esta instancia a cargo de Porvenir y Colpensiones. Se fija como agencias en derecho en la suma de \$1.000.000 para cada una y en favor de la accionante.


Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

(Firmas escaneadas)

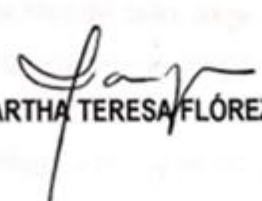
Los Magistrados,



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN
Demandante:	<b>MARIA EUGENIA CARVAJAL VELASQUEZ</b>
Demandado:	<b>COLPENSIONES y PORVENIR S.A.</b>
Radicado No.:	05001-31-05-002-2017-00872-01.
Tema:	Ineficacia traslado y pensión vejez
Decisión:	<b>MODIFICA SENTENCIA</b>
Fecha de la sentencia:	<b>19/08/2022</b>

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 22/08/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
**Secretario**